

Biblioteca del Congreso Nacional

Identificación de la Norma : DFL-1; DFL-1-19653
Fecha de Publicación : 17.11.2001
Fecha de Promulgación : 13.12.2000
Organismo : MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

Ultima Modificación : LEY-20205 24.07.2007
FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y
SISTEMATIZADO DE LA LEY N° 18.575,
ORGANICA CONSTITUCIONAL DE BASES
GENERALES DE LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO

D.F.L. Núm. 1/19.653.- Santiago,
13 de diciembre de 2000.- Visto: Lo
dispuesto en el Artículo 61 de la
Constitución Política de la República
y la facultad que me ha conferido el
Artículo 4° transitorio de la ley N°
19.653.

Decreto con fuerza de ley

TITULO I

Normas Generales

Artículo 1°.- El Presidente de Ley 18.575
la República ejerce el gobierno y la Art. 1°
administración del Estado con la D.O. 05.12.1986
colaboración de los órganos que
establezcan la Constitución y las
leyes.

La Administración del Estado
estará constituida por los Ministerios,
las Intendencias, las Gobernaciones
y los órganos y servicios públicos
creados para el cumplimiento de la
función administrativa, incluidos
la Contraloría General de la República,
el Banco Central, las Fuerzas Armadas
y las Fuerzas de Orden y Seguridad
Pública, los Gobiernos Regionales, Ley 19.653
las Municipalidades y las empresas Art. 1° N° 1
públicas creadas por ley. D.O. 14.12.1999
Artículo 2°.- Los órganos de la Ley 18.575
Administración del Estado someterán su Art. 2°
acción a la Constitución y a las leyes. D.O. 05.12.1986
Deberán actuar dentro de su competencia
y no tendrán más atribuciones que las
que expresamente les haya conferido el
ordenamiento jurídico. Todo abuso o
exceso en el ejercicio de sus
potestades dará lugar a las acciones
y recursos correspondientes.

Artículo 3°.- La Administración Ley 18.575
del Estado está al servicio de la Art. 3°
persona humana; su finalidad es D.O. 05.12.1986
promover el bien común atendiendo las
necesidades públicas en forma continua
y permanente y fomentando el desarrollo
del país a través del ejercicio de las
atribuciones que le confiere la
Constitución y la ley, y de la
aprobación, ejecución y control de
políticas, planes, programas y acciones Ley 19.653
de alcance nacional, regional y Art. 1° N° 2

comunal. D.O. 14.12.1999

La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas, y garantizará la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica en conformidad con la Constitución Política y las leyes.

Artículo 4°.- El Estado será Ley 18.575 responsable por los daños que causen Art. 4° los órganos de la Administración en el D.O. 05.12.1986 ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado.

Artículo 5°.- Las autoridades y Ley 19.653 funcionarios deberán velar por la Art. 1° N° 3 eficiente e idónea administración de D.O. 14.12.1999 los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.

Los órganos de la Administración Ley 18.575 del Estado deberán cumplir sus Art. 5° cometidos coordinadamente y propender D.O. 05.12.1986 a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones.

Artículo 6°.- El Estado podrá Ley 18.575 participar y tener representación en Art. 6° entidades que no formen parte de su D.O. 05.12.1986 Administración sólo en virtud de una ley que lo autorice, la que deberá ser un quórum calificado si esas entidades desarrollan actividades empresariales. Las entidades a que se refiere el inciso anterior no podrán, en caso alguno, ejercer potestades públicas.

Artículo 7°.- Los funcionarios de Ley 18.575 la Administración del Estado estarán Art. 7° afectos a un régimen jerarquizado y D.O. 05.12.1986 disciplinado. Deberán cumplir fiel y Ley 19.653 esmeradamente sus obligaciones para con Art. 1° N° 4 el servicio y obedecer las órdenes que D.O. 14.12.1999 les imparta el superior jerárquico.

Artículo 8°.- Los órganos de la Ley 18.575 Administración del Estado actuarán por Art. 8° propia iniciativa en el cumplimiento de D.O. 05.12.1986 sus funciones, o a petición de parte Ley 19.653 cuando la ley lo exija expresamente o Art. 1° N° 5 se haga uso del derecho de petición o D.O. 14.12.1999 reclamo, procurando la simplificación y rapidez de los trámites.

Los procedimientos administrativos deberán ser ágiles y expeditos, sin más formalidades que las que establezcan las leyes y reglamentos.

Artículo 9°.- Los contratos administrativos se celebrarán previa

propuesta pública, en conformidad a la ley.

El procedimiento concursal se regirá por los principios de libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el contrato. La licitación privada procederá, en su caso, previa resolución fundada que así lo disponga, salvo que por la Ley 19.653 naturaleza de la negociación Art. 1° N° 6 corresponda acudir al trato directo. D.O. 14.12.1999 Artículo 10°.- Los actos Ley 18.575 administrativos serán impugnables Art. 9° mediante los recursos que establezca la D.O. 05.12.1986 ley. Se podrá siempre interponer el de reposición ante el mismo órgano del que hubiere emanado el acto respectivo y, cuando proceda, el recurso jerárquico, ante el superior correspondiente, sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales a que haya lugar.

Artículo 11.- Las autoridades y Ley 18.575 jefaturas, dentro del ámbito de su Art. 10° competencia y en los niveles que D.O. 05.12.1986 corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia.

Este control se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones.

Artículo 12.- Las autoridades y Ley 18.575 funcionarios facultados para elaborar Art. 11° planes o dictar normas, deberán velar D.O. 05.12.1986 permanentemente por el cumplimiento de aquéllos y la aplicación de éstas dentro del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de las obligaciones propias del personal de su dependencia.

Artículo 13.- Los funcionarios de Ley 19.653 la Administración del Estado deberán Art. 1° N° 7 observar el principio de probidad D.O. 14.12.1999 administrativa y, en particular, las normas legales generales y especiales que lo regulan.

La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella.

Son públicos los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial.

La publicidad a que se refiere el inciso anterior se extiende a los informes y antecedentes que las empresas privadas que presten servicios de utilidad pública y las empresas a

que se refieren los incisos tercero y quinto del Artículo 37 de la ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, proporcionen a las entidades estatales encargadas de su fiscalización, en la medida que sean de interés público, que su difusión no afecte el debido funcionamiento de la empresa y que el titular de dicha información no haga uso de su derecho a denegar el acceso a la misma, conforme a lo establecido en los incisos siguientes.

En caso de que la información referida en los incisos anteriores no se encuentre a disposición del público de modo permanente, el interesado tendrá derecho a requerirla por escrito al jefe del servicio respectivo.

Cuando el requerimiento se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos o intereses de terceros, el jefe superior del órgano requerido, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo.

Los terceros interesados podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres días hábiles contado desde la fecha de notificación, la cual se entenderá practicada al tercer día de despachada la correspondiente carta certificada. La oposición deberá presentarse por escrito y no requerirá expresión de causa.

Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de proporcionar la documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución judicial en contrario, dictada conforme al procedimiento que establece el Artículo siguiente. En caso de no deducirse la oposición, se entenderá que el tercero afectado accede a la publicidad de dicha información, a menos que el jefe superior requerido estime fundadamente que la divulgación de la información involucrada afecta sensiblemente los derechos o intereses de los terceros titulares de la misma.

El jefe superior del órgano requerido deberá pronunciarse sobre la petición, sea entregando la documentación solicitada o negándose a ello, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contado desde la formulación del requerimiento, o desde la expiración del plazo concedido al tercero afectado, en el caso previsto

en el inciso séptimo.

El jefe superior del órgano requerido deberá proporcionar la documentación que se les solicite, salvo que concurra alguna de las causales que establece el inciso siguiente, que le autorizan a negarse. En este caso, su negativa a entregar la documentación deberá formularse por escrito y fundadamente, especificando las razones que en cada caso motiven su decisión.

Las únicas causales en cuya virtud se podrá denegar la entrega de los documentos o antecedentes requeridos son la reserva o secreto establecidos en disposiciones legales o reglamentarias; el que la publicidad impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido; la oposición deducida en tiempo y forma por los terceros a quienes se refiere o afecta la información contenida en los documentos requeridos; el que la divulgación o entrega de los documentos o antecedentes requeridos afecte sensiblemente los derechos o intereses de terceras personas, según calificación fundada efectuada por el jefe superior del órgano requerido, y el que la publicidad afecte la seguridad de la Nación o el interés nacional.

Uno o más reglamentos establecerán los casos de secreto o reserva de la documentación y antecedentes que obren en poder de los órganos de la Administración del Estado.

Artículo 14.- Vencido el plazo Ley 19.653 previsto en el Artículo anterior para Art. 1° N° 7 la entrega de la documentación D.O. 14.12.1999 requerida, o denegada la petición por una causa distinta de la seguridad de la Nación o el interés nacional, el requirente tendrá derecho a recurrir al juez de letras en lo civil del domicilio del órgano de la Administración requerido, que se encuentre de turno según las reglas correspondientes, solicitando amparo al derecho consagrado en el Artículo precedente.

El procedimiento se sujetará a las reglas siguientes:

- a) La reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso.
- b) El tribunal dispondrá que la reclamación sea notificada por cédula, en la oficina de partes de la repartición pública correspondiente y en el domicilio del tercero

involucrado, si lo hubiere. En igual forma se notificará la sentencia que se dicte.

c) La autoridad reclamada y el tercero, en su caso, deberán presentar sus descargos dentro de quinto día hábil y adjuntar los medios de prueba que acrediten los hechos en que los fundan. De no disponer de ellos, expresarán esta circunstancia y el tribunal fijará una audiencia, para dentro de quinto día hábil, a fin de recibir la prueba ofrecida y no acompañada.

d) La prueba se consignará en un cuaderno separado y reservado, que conservará ese carácter aun después de afinada la causa, en caso de que por sentencia ejecutoriada se confirmase el carácter secreto o reservado de la información y se denegare el acceso a ella.

En tanto no exista sentencia ejecutoriada que declare su derecho, en ningún caso el reclamante podrá tener acceso a los documentos objeto del requerimiento, aun cuando fueren acompañados como prueba en el procedimiento que regula este Artículo.

e) La sentencia definitiva se dictará dentro de tercero día de vencido el plazo a que se refiere la letra c) precedente, sea que se hayan o no presentado descargos. Si el tribunal decretó una audiencia de prueba, este plazo correrá una vez vencido el plazo fijado para ésta.

f) Todas las resoluciones, con excepción de la indicada en la letra g) de este inciso, se dictarán en única instancia y se notificarán por el estado diario.

g) La sentencia definitiva será apelable en ambos efectos. El recurso deberá interponerse en el término fatal de cinco días, contado desde la notificación de la parte que lo entabla, deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se formulan.

h) Deducida la apelación, el tribunal elevará de inmediato los autos a la Corte de Apelaciones respectiva. Recibidos los autos en la Secretaría de la Corte, el Presidente ordenará dar cuenta preferente del recurso, sin esperar la comparecencia de ninguna de las partes.

i) El fallo que se pronuncie sobre la apelación no será susceptible de los recursos de casación.

En caso de que la causal invocada para denegar la entrega de documentos o

información fuere el que su publicidad afecta la seguridad de la Nación o el interés nacional, la reclamación del requirente deberá deducirse ante la Corte Suprema, la que solicitará informe de la autoridad de que se trate por la vía que considere más rápida, fijándole plazo al efecto, transcurrido el cual resolverá en cuenta la controversia. En caso de ser pertinente, será aplicable en este caso lo dispuesto en la letra d) del inciso anterior.

La sala de la Corte Suprema que conozca la reclamación conforme al inciso anterior, o la sala de la Corte de Apelaciones que conozca la apelación, tratándose del procedimiento establecido en los incisos primero y segundo, si lo estima conveniente o se le solicita con fundamento plausible, podrá ordenar traer los autos en relación para oír a los abogados de las partes, en cuyo caso la causa se agregará extraordinariamente a la tabla respectiva de la misma sala. En estos casos, el Presidente del Tribunal dispondrá que la audiencia no sea pública.

En caso de acogerse la reclamación, la misma sentencia que ordene entregar los documentos o antecedentes fijará un plazo prudencial para ello. En la misma resolución, el tribunal podrá aplicar al jefe del servicio una multa de dos a diez unidades tributarias mensuales.

La no entrega oportuna de los documentos o antecedentes respectivos, en la forma que decreta el tribunal, será sancionada con la suspensión del jefe del servicio de su cargo, por un lapso de cinco a quince días, y con multa de dos a diez unidades tributarias mensuales. Si el jefe del servicio persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de las sanciones indicadas.

El costo del material empleado para entregar la información será siempre de cargo del requirente, salvo las excepciones legales.

Artículo 15.- El personal de la Ley 18.575 Administración del Estado se regirá Art. 12° por las normas estatutarias que D.O. 05.12.1986 establezca la ley, en las cuales se regulará el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones.

Artículo 16.- Para ingresar a la Ley 18.575 Administración del Estado se deberá Art. 13° cumplir con los requisitos generales D.O. 05.12.1986 que determine el respectivo estatuto y con los que establece el Título III de

esta ley, además de los exigidos para el cargo que se provea.
Todas las personas que cumplan con Ley 19.653 los requisitos correspondientes tendrán Art. 1° N° 8 el derecho de postular en igualdad de D.O. 14.12.1999 condiciones a los empleos de la Administración del Estado, previo concurso.

Artículo 17.- Las normas Ley 18.575 estatutarias del personal de la Art. 14° Administración del Estado deberán D.O. 05.12.1986 proteger la dignidad de la función pública y guardar conformidad con su carácter técnico, profesional y jerarquizado.

Artículo 18.- El personal de la Ley 18.575 Administración del Estado estará sujeto Art. 15° a responsabilidad administrativa, sin D.O. 05.12.1986 perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda afectarle.

En el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a un racional y justo procedimiento.

Artículo 19.- El personal de Ley 18.575 la Administración del Estado estará Art. 16° impedido de realizar cualquier D.O. 05.12.1986 actividad política dentro de la Ley 19.653 Administración. Art. 1° N° 9 D.O. 14.12.1999

Artículo 20.- La Administración Ley 18.575 del Estado asegurará la capacitación Art. 17° y el perfeccionamiento de su personal, D.O. 05.12.1986 conducentes a obtener la formación y los conocimientos necesarios para el desempeño de la función pública.

TÍTULO II (Arts. 21-51)

Normas Especiales

Párrafo 1° (Arts. 21-42)

De la Organización y Funcionamiento

Artículo 21.- La organización Ley 18.575 básica de los Ministerios, las Art. 18° Intendencias, las Gobernaciones y D.O. 05.12.1986 los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, será la establecida en este Título.

Las normas del presente Título no se aplicarán a la Contraloría General de la República, al Banco Central, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Ley 19.653 Gobiernos Regionales, a las Art. 1° N° 10 Municipalidades, al Consejo Nacional D.O. 14.12.1999 de Televisión y a las empresas públicas creadas por ley, órganos que se registrarán por las normas constitucionales pertinentes y por sus respectivas leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado, según corresponda.

Artículo 22.- Los Ministerios son Ley 18.575 los órganos superiores de colaboración Art. 19° del Presidente de la República en las D.O. 05.12.1986 funciones de gobierno y administración de sus respectivos sectores, los cuales

corresponden a los campos específicos de actividades en que deben ejercer dichas funciones.

Para tales efectos, deberán proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar las actividades del respectivo sector. En circunstancias excepcionales, Ley 18.891 la ley podrá encomendar alguna de las Art. Unico N° 1 funciones señaladas en el inciso D.O. 06.01.1990 anterior a los servicios públicos.

Asimismo, en los casos calificados que determine la ley, un ministerio podrá actuar como órgano administrativo de ejecución.

Artículo 23.- Los Ministros de Ley 18.575 Estado, en su calidad de colaboradores Art. 20° directos e inmediatos del Presidente D.O. 05.12.1986 de la República, tendrán la responsabilidad de la conducción de sus respectivos Ministerios, en conformidad con las políticas e instrucciones que aquél imparta.

El Presidente de la República podrá encomendar a uno o más Ministros la coordinación de la labor que corresponde a los Secretarios de Estado y las relaciones del Gobierno con el Congreso Nacional.

Artículo 24.- En cada Ministerio Ley 18.575 habrá una o más Subsecretarías, cuyos Art. 21° jefes superiores serán los D.O. 05.12.1986 Subsecretarios, quienes tendrán el carácter de colaboradores inmediatos de los Ministros. Les corresponderá coordinar la acción de los órganos y servicios públicos del sector, actuar como ministros de fe, ejercer la administración interna del Ministerio y cumplir las demás funciones que les señale la ley.

Artículo 25.- El Ministro será Ley 18.575 subrogado por el respectivo Art. 22° Subsecretario y, en caso de existir D.O. 05.12.1986 más de uno, por el de más antigua designación; salvo que el Presidente de la República nombre a otro Secretario de Estado o que la ley establezca para Ministerios determinados otra forma de subrogación.

Artículo 26.- Los Ministerios, Ley 18.575 con las excepciones que contemple Art. 23° la ley, se desconcentrarán D.O. 05.12.1986 territorialmente mediante Secretarías D.F.L. 291, 1993, Regionales Ministeriales, las que de Interior estarán a cargo de un Secretario Art. 61 Regional Ministerial. D.O. 20.03.1993

NOTA

NOTA:

Véase el DTO 291, Interior,

publicado el 20.03.1993

Artículo 27.- En la organización Ley 18.575 de los Ministerios, además de las Art. 24° Subsecretarías y de las Secretarías D.O. 05.12.1986 Regionales Ministeriales, podrán existir sólo los niveles jerárquicos de División, Departamento, Sección y Oficina, considerando la importancia relativa y el volumen de trabajo que signifique la respectiva función.

No obstante lo dispuesto en el Ley 18.891 inciso anterior, en circunstancias Art. Unico N° 2 excepcionales la ley podrá establecer D.O. 06.01.1990 niveles jerárquicos distintos o adicionales, así como denominaciones diferentes.

Artículo 28.- Los servicios públicos son órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades Ley 18.575 colectivas, de manera regular y Art. 25° continua. Estarán sometidos a la D.O. 05.12.1986 dependencia o supervigilancia del Presidente de la República a través de los respectivos Ministerios, cuyas políticas, planes y programas les corresponderá aplicar, sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 22, inciso tercero, y 30.

La ley podrá, excepcionalmente, Ley 18.891 crear servicios públicos bajo la Art. Unico N° 3 dependencia o supervigilancia directa D.O. 06.01.1990 del Presidente de la República.

Artículo 29.- Los servicios Ley 18.575 públicos serán centralizados o Art. 26° descentralizados. D.O. 05.12.1986

Los servicios centralizados actuarán bajo la personalidad jurídica y con los bienes y recursos del Fisco y estarán sometidos a la dependencia del Presidente de la República, a través del Ministerio correspondiente.

Los servicios descentralizados actuarán con la personalidad jurídica y el patrimonio propios que la ley les asigne y estarán sometidos a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio respectivo. La descentralización podrá ser funcional o territorial.

Artículo 30.- Los servicios Ley 18.575 públicos centralizados o Art. 27° descentralizados que se creen para D.O. 05.12.1986 desarrollar su actividad en todo o parte de una región, estarán sometidos, en su caso, a la dependencia o supervigilancia del respectivo Intendente.

No obstante lo anterior, esos servicios quedarán sujetos a las políticas nacionales y a las normas técnicas del Ministerio a cargo del sector respectivo.

Artículo 31.- Los servicios Ley 18.575 públicos estarán a cargo de un jefe Art. 28° superior denominado Director, quien D.O. 05.12.1986

será el funcionario de más alta jerarquía dentro del respectivo organismo. Sin embargo, la ley podrá, en casos excepcionales, otorgar a los jefes superiores una denominación distinta.

A los jefes de servicio les corresponderá dirigir, organizar y administrar el correspondiente servicio; controlarlo y velar por el cumplimiento de sus objetivos; responder de su gestión, y desempeñar las demás funciones que la ley les asigne.

En circunstancias excepcionales Ley 18.891 la ley podrá establecer consejos u Art. único N° 4 órganos colegiados en la estructura D.O. 06.01.1990 de los servicios públicos con las facultades que ésta señale, incluyendo la de dirección superior del servicio.

Artículo 32.- En la organización Ley 18.575 interna de los servicios públicos sólo Art. 29° podrán establecerse los niveles de D.O. 05.12.1986 Dirección Nacional, Direcciones Regionales, Departamento, Subdepartamento, Sección y Oficina.

La organización interna de los servicios públicos que se creen para desarrollar su actividad en todo o parte de una región, podrá considerar solamente los niveles de Dirección, Departamento, Subdepartamento, Sección y Oficina.

Para la creación de los niveles jerárquicos se considerará la importancia relativa y el volumen de trabajo que signifiquen las respectivas funciones y el ámbito territorial en que actuará el servicio. Las instituciones de Educación Superior de carácter estatal podrán, además, establecer en su organización Facultades, Escuelas, Institutos, Centros de Estudios y otras estructuras necesarias para el cumplimiento de sus fines específicos.

No obstante lo dispuesto en los Ley 18.891 incisos anteriores, en circunstancias Art. único N° 5 excepcionales, la ley podrá establecer D.O. 06.01.1990 niveles jerárquicos distintos o adicionales, así como denominaciones diferentes.

Artículo 33.- Sin perjuicio de su Ley 18.575 dependencia jerárquica general, la ley Art. 30° podrá desconcentrar, territorial y D.O. 05.12.1986 funcionalmente, a determinados órganos.

La desconcentración territorial se hará mediante Direcciones Regionales, a cargo de un Director Regional, quien dependerá jerárquicamente del Director Nacional del servicio. No obstante, para los efectos de la ejecución de las políticas, planes y programas de desarrollo regional, estarán subordinados al Intendente a través

del respectivo Secretario Regional Ministerial.

La desconcentración funcional se realizará mediante la radicación por ley de atribuciones en determinados órganos del respectivo servicio.

Artículo 34.- En los casos en que Ley 18.575 la ley confiera competencia exclusiva Art. 31° a los servicios centralizados para la D.O. 05.12.1986 resolución de determinadas materias, el jefe del servicio no quedará subordinado al control jerárquico en cuanto a dicha competencia.

Del mismo modo, la ley podrá dotar a dichos servicios de recursos especiales o asignarles determinados bienes para el cumplimiento de sus fines propios, sin que ello signifique la constitución de un patrimonio diferente del fiscal.

Artículo 35.- El Presidente de la Ley 18.575 República podrá delegar en forma Art. 32° genérica o específica la representación D.O. 05.12.1986 del Fisco en los jefes superiores de los servicios centralizados, para la ejecución de los actos y celebración de los contratos necesarios para el cumplimiento de los fines propios del respectivo servicio. A proposición del jefe superior, el Presidente de la República podrá delegar esa representación en otros funcionarios del servicio.

Artículo 36.- La representación Ley 18.575 judicial y extrajudicial de los Art. 33° servicios descentralizados D.O. 05.12.1986 corresponderá a los respectivos jefes superiores.

Artículo 37.- Los servicios Ley 18.575 públicos podrán encomendar la Art. 34° ejecución de acciones y entregar la D.O. 05.12.1986 administración de establecimientos o bienes de su propiedad, a las Municipalidades o a entidades de derecho privado, previa autorización otorgada por ley y mediante la celebración de contratos, en los cuales deberá asegurarse el cumplimiento de los objetivos del servicio y el debido resguardo del patrimonio del Estado.

Artículo 38.- En aquellos lugares Ley 18.575 donde no exista un determinado servicio Art. 35° público, las funciones de éste podrán D.O. 05.12.1986 ser asumidas por otro. Para tal efecto, deberá celebrarse un convenio entre los jefes superiores de los servicios, aprobado por decreto supremo suscrito por los Ministros correspondientes.

Tratándose de convenios de los servicios a que se refiere el Artículo 30, éstos serán aprobados por resolución del respectivo Intendente.

Artículo 39.- Las contiendas de Ley 18.575 competencia que surjan entre diversas Art. 36° autoridades administrativas serán D.O. 05.12.1986

resueltas por el superior jerárquico del cual dependan o con el cual se relacionen. Tratándose de autoridades dependientes o vinculadas con distintos Ministerios, decidirán en conjunto los Ministros correspondientes, y si hubiere desacuerdo, resolverá el Presidente de la República.

Artículo 40.- Los Ministros de Ley 18.575 Estado y los Subsecretarios serán de Art. 42° la exclusiva confianza del Presidente D.O. 05.12.1986 de la República, y requerirán, para su designación, ser chilenos, tener cumplidos veintiún años de edad y reunir los requisitos generales para el ingreso a la Administración Pública.

No podrá ser Ministro de Estado el LEY 20000 que tuviere dependencia de sustancias o Art. 68 N° 1 drogas estupefacientes o sicotrópicas D.O. 16.02.2005 ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para asumir alguno de esos cargos, el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad.

Los jefes superiores de servicio, con excepción de los rectores de las instituciones de Educación Superior de carácter estatal, serán de exclusiva confianza del Presidente de la República, y para su designación deberán cumplir con los requisitos generales de ingreso a la Administración Pública, y con los que para casos especiales exijan las leyes.

Artículo 41.- El ejercicio de las Ley 18.575 atribuciones y facultades propias podrá Art. 43° ser delegado, sobre las bases D.O. 05.12.1986 siguientes:

- a) La delegación deberá ser parcial y recaer en materias específicas;
- b) Los delegados deberán ser funcionarios de la dependencia de los delegantes;
- c) El acto de delegación deberá ser publicado o notificado según corresponda;
- d) La responsabilidad por las decisiones administrativas que se adopten o por las actuaciones que se ejecuten recaerá en el delegado, sin perjuicio de la responsabilidad del delegante por negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de dirección o fiscalización; y
- e) La delegación será esencialmente revocable.

El delegante no podrá ejercer la competencia delegada sin que previamente revoque la delegación. Podrá igualmente, delegarse la facultad de firmar, por orden de la autoridad delegante, en determinados actos sobre materias específicas.

Esta delegación no modifica la responsabilidad de la autoridad correspondiente, sin perjuicio de la que pudiera afectar al delegado por negligencia en el ejercicio de la facultad delegada.

Artículo 42.- Los órganos de la Ley 18.575 Administración serán responsables del Art. 44° daño que causen por falta de servicio. D.O. 05.12.1986 No obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal.

Párrafo 2° (Arts. 43-51)

De la Carrera Funcionaria

Artículo 43.- El Estatuto Ley 18.575 Administrativo del personal de los Art. 45° organismos señalados en el inciso D.O. 05.12.1986 primero del Artículo 21 regulará la Ley 19.653 carrera funcionaria y considerará Art. 1° N° 11 especialmente el ingreso, los deberes D.O. 14.12.1999 y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones, en conformidad con las bases que se establecen en los Artículos siguientes y en el Título III de esta ley.

Cuando las características de su ejercicio lo requieran, podrán existir estatutos de carácter especial para determinadas profesiones o actividades. Estos estatutos deberán ajustarse, en todo caso, a las disposiciones de este Párrafo.

Artículo 44.- El ingreso en Ley 18.575 calidad de titular se hará por Art. 46° concurso público y la selección de D.O. 05.12.1986 los postulantes se efectuará mediante procedimientos técnicos, imparciales e idóneos que aseguren una apreciación objetiva de sus aptitudes y méritos.

Artículo 45.- Este personal estará Ley 18.575 sometido a un sistema de carrera que Art. 47° proteja la dignidad de la función D.O. 05.12.1986 pública y que guarde conformidad con su carácter técnico, profesional y jerarquizado.

La carrera funcionaria será regulada por el respectivo estatuto y se fundará en el mérito, la antigüedad y la idoneidad de los funcionarios, para cuyo efecto existirán procesos de calificación objetivos e imparciales.

Las promociones deberán Ley 19.653 efectuarse, según lo disponga el Art. 1° N° 12 estatuto, por concurso, al que se D.O. 14.12.1999 aplicarán las reglas previstas en el Artículo anterior, o por ascenso en el respectivo escalafón.

Artículo 46.- Asimismo, este Ley 18.575 personal gozará de estabilidad en el Art. 48° empleo y sólo podrá cesar en él por D.O. 05.12.1986 renuncia voluntaria debidamente aceptada; por jubilación o por otra causal legal, basada en su desempeño

deficiente, en el incumplimiento de sus obligaciones, en la pérdida de requisitos para ejercer la función, en el término del período legal por el cual se es designado o en la supresión del empleo. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad que tiene el Presidente de la República o la autoridad llamada a hacer el nombramiento en relación con los cargos de su exclusiva confianza. El desempeño deficiente y el incumplimiento de obligaciones deberá acreditarse en las calificaciones correspondientes o mediante investigación o sumario administrativo. Los funcionarios públicos sólo podrán ser destinados a funciones propias del empleo para el cual han sido designados, dentro del órgano o servicio público correspondiente. Los funcionarios públicos podrán ser designados en comisiones de servicio para el desempeño de funciones ajenas al cargo, en el mismo órgano o servicio público o en otro distinto, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Las comisiones de servicio serán esencialmente transitorias, y no podrán significar el desempeño de funciones de inferior jerarquía a las del cargo, o ajenas a los conocimientos que éste requiere o al servicio público.

Artículo 47.- Para los efectos de Ley 18.575 la calificación del desempeño de los Art. 49° funcionarios públicos, un reglamento D.O. 05.12.1986 establecerá un procedimiento de carácter general, que asegure su objetividad e imparcialidad, sin perjuicio de las reglamentaciones especiales que pudieran dictarse de acuerdo con las características de determinados organismos o servicios públicos. Además, se llevará una hoja de vida por cada funcionario, en la cual se anotarán sus méritos y deficiencias.

La calificación se considerará para el ascenso, la eliminación del servicio y los estímulos al funcionario, en la forma que establezca la ley.

Artículo 48.- La capacitación y el Ley 18.575 perfeccionamiento en el desempeño de la Art. 50° función pública se realizarán mediante D.O. 05.12.1986 un sistema que propenda a estos fines, a través de programas nacionales, regionales o locales.

Estas actividades podrán llevarse a cabo mediante convenios con instituciones públicas o privadas. La ley podrá exigir como requisito de promoción o ascenso el haber cumplido determinadas actividades de

capacitación o perfeccionamiento.
La destinación a los cursos de capacitación y perfeccionamiento se efectuará por orden de escalafón o por concurso, según lo determine la ley. Podrán otorgarse becas a los funcionarios públicos para seguir cursos relacionados con su capacitación y perfeccionamiento.

El presupuesto de la Nación considerará globalmente o por organismo los recursos para los efectos previstos en este Artículo.

Artículo 49.- Sin perjuicio de lo Ley 18.575 dispuesto en los N°s. 9° y 10° del Art. 51° Artículo 32 de la Constitución Política D.O. 05.12.1986 de la República, la ley podrá otorgar a determinados empleos la calidad de cargos de la exclusiva confianza del Presidente de la República o de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento.

No obstante, la ley sólo podrá Ley 18.972 conferir dicha calidad a empleos que Art. 1°, 1.- correspondan a los tres primeros a) y b) niveles jerárquicos del respectivo D.O. 10.03.1990 órgano o servicio. Uno de los niveles jerárquicos corresponderá, en el caso de los Ministerios, a los Secretarios Regionales Ministeriales, y en el caso de los servicios públicos, a los subdirectores y a los directores regionales. Si el respectivo órgano o servicio no contare con los cargos antes mencionados, la ley podrá otorgar la calidad de cargo de la exclusiva confianza, sólo a los empleos que correspondan a los dos primeros niveles jerárquicos. Para estos efectos, no se considerarán los cargos a que se refieren las disposiciones constitucionales citadas en el inciso precedente.

Con todo, la ley podrá también Ley 19.154 otorgar la calidad de cargo de la Art. 1° exclusiva confianza a todos aquellos D.O. 03.08.1992 que conforman la planta de personal de la Presidencia de la República. Se entenderá por funcionarios de exclusiva confianza aquéllos sujetos a la libre designación y remoción del Presidente de la República o de la autoridad facultada para disponer el nombramiento.

Artículo 50.- Los regímenes Ley 18.575 legales de remuneraciones podrán Art. 52° establecer sistemas o modalidades que D.O. 05.12.1986 estimulen el ejercicio de determinadas funciones por parte de los empleados o premien la idoneidad de su desempeño, sin perjuicio de la aplicación de las escalas generales de sueldos y del principio de que a funciones análogas, que importen responsabilidades semejantes y se ejerzan en condiciones

similares, se les asignen iguales Ley 19.653 retribuciones y demás beneficios Art. 1° N° 13 económicos. D.O. 14.12.1999

Artículo 51.- El Estado velará Ley 18.575 permanentemente por la carrera Art. 53° funcionaria y el cumplimiento de las D.O. 05.12.1986 normas y principios de carácter técnico y profesional establecidos en este párrafo, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes.

TITULO III (Arts. 52-68) Ley 19.653 Art. 2°

De la probidad administrativa D.O. 14.12.1999 Párrafo 1° (Arts. 52-53)

Reglas generales

Artículo 52.- Las autoridades Ley 19.653 de la Administración del Estado, Art. 2° cualquiera que sea la denominación D.O. 14.12.1999 con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa.

El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4° de este Título, en su caso.

Artículo 53.- El interés general Ley 19.653 exige el empleo de medios idóneos de Art. 2° diagnóstico, decisión y control, para D.O. 14.12.1999 concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan; en la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la información administrativa, en conformidad a la ley.

Párrafo 2° (Arts. 54-56)

De las inhabilidades e incompatibilidades administrativas

Artículo 54.- Sin perjuicio de las Ley 19.653 inhabilidades especiales que establezca Art. 2° la ley, no podrán ingresar a cargos en D.O. 14.12.1999 la Administración del Estado:

a) Las personas que tengan vigente o suscriban, por sí o por terceros,

contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con el respectivo organismo de la Administración Pública. Tampoco podrán hacerlo quienes tengan litigios pendientes con la institución de que se trata, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

b) Las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración civil del Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive.

c) Las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito. Artículo 55.- Para los efectos del Ley 19.653 Artículo anterior, los postulantes a Art. 2° un cargo público deberán prestar una D.O. 14.12.1999 declaración jurada que acredite que no se encuentran afectos a alguna de las causales de inhabilidad previstas en ese Artículo.

Artículo 55 bis.- No podrá desempeñar LEY 20000 las funciones de Subsecretario, jefe Art. 68 N° 2 superior de servicio ni directivo superior D.O. 16.02.2005 de un órgano u organismo de la Administración del Estado, hasta el grado de jefe de división o su equivalente, el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico.

Para asumir alguno de esos cargos, el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad.

Artículo 56.- Todos los Ley 19.653 funcionarios tendrán derecho a ejercer Art. 2° libremente cualquier profesión, D.O. 14.12.1999 industria, comercio u oficio conciliable con su posición en la Administración del Estado, siempre que con ello no se perturbe el fiel y

oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios, sin perjuicio de las prohibiciones o limitaciones establecidas por ley.

Estas actividades deberán desarrollarse siempre fuera de la jornada de trabajo y con recursos privados. Son incompatibles con la función pública las actividades particulares cuyo ejercicio deba realizarse en horarios que coincidan total o parcialmente con la jornada de trabajo que se tenga asignada. Asimismo, son incompatibles con el ejercicio de la función pública las actividades particulares de las autoridades o funcionarios que se refieran a materias específicas o casos concretos que deban ser analizados, informados o resueltos por ellos o por el organismo o servicio público a que pertenezcan; y la representación de un tercero en acciones civiles deducidas en contra de un organismo de la Administración del Estado, salvo que actúen en favor de alguna de las personas señaladas en la letra b) del Artículo 54 o que medie disposición especial de ley que regule dicha representación.

Del mismo modo son incompatibles las actividades de las ex autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo. Esta incompatibilidad se mantendrá hasta seis meses después de haber expirado en funciones.

Párrafo 3° (Arts. 57-60)

De la declaración de intereses LEY 20088 y de patrimonio Art. 1° N° 1)
D.O. 05.01.2006

NOTA

Artículo 57.- El Presidente de Ley 19.653 la República, los Ministros de Estado, Art. 2° los Subsecretarios, los Intendentes y D.O. 14.12.1999 Gobernadores, los Secretarios Regionales Ministeriales, los Jefes Superiores de Servicio, los Embajadores, los Consejeros del Consejo de Defensa del Estado, el Contralor General de la República, los oficiales generales y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y niveles jerárquicos equivalentes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Alcaldes, Concejales y Consejeros Regionales deberán presentar una declaración de intereses, dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de asunción del cargo.
Igual obligación recaerá sobre

las demás autoridades y funcionarios directivos, profesionales, técnicos y fiscalizadores de la Administración del Estado que se desempeñen hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente.

La obligación de presentar declaración de intereses regirá independientemente de la declaración de patrimonio que leyes especiales impongan a esas autoridades y funcionarios.

NOTA:

El artículo 2° Transitorio de la LEY 20088, publicada el 05.01.2006, modificatoria de la presente norma, dispone que las modificaciones que introduce a ésta, entrarán en vigencia noventa días después de la publicación del Reglamento que establecerá los requisitos de las declaraciones de patrimonio, según lo dispone el artículo 1° Transitorio de la citada Ley. Dicho reglamento se encuentra contenido en el DTO 45, Secretaría General de la Presidencia, publicado el 22.03.2006.

Artículo 58.- La declaración Ley 19.653 de intereses deberá contener la Art. 2° individualización de las actividades D.O. 14.12.1999 profesionales y económicas en que participe la autoridad o el funcionario.

Artículo 59.- La declaración será Ley 19.653 pública y deberá actualizarse cada Art. 2° cuatro años, y cada vez que ocurra un D.O. 14.12.1999 hecho relevante que la modifique.

Se presentará en tres ejemplares, que serán autenticados al momento de su recepción por el ministro de fe del órgano u organismo a que pertenezca el declarante o, en su defecto, ante notario. Uno de ellos será remitido a la Contraloría General de la República o a la Contraloría Regional, según corresponda, para su custodia, archivo y consulta, otro se depositará en la oficina de personal del órgano u organismo que los reciba y otro se devolverá al interesado.

Artículo 60.- Un reglamento Ley 19.653 establecerá los requisitos de las Art. 2° declaraciones de intereses y contendrá D.O. 14.12.1999 las demás normas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de este párrafo.

Artículo 60 A.- Sin perjuicio de LEY 20088 la declaración de intereses a que se Art. 1° N° 1 refiere el Párrafo anterior, las D.O. 05.01.2006 personas señaladas en el artículo 57 NOTA deberán hacer una declaración de patrimonio.

También deberán hacer esta declaración todos los directores que representen al Estado

en las empresas a que se refieren los incisos tercero y quinto del artículo 37 de la ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas.

NOTA:

El artículo 2° Transitorio de la LEY 20088, publicada el 05.01.2006, modificatoria de la presente norma, dispone que las modificaciones que introduce a ésta, entrarán en vigencia noventa días después de la publicación del Reglamento que establecerá los requisitos de las declaraciones de patrimonio, según lo dispone el artículo 1° Transitorio de la citada Ley. Dicho reglamento se encuentra contenido en el DTO 45, Secretaría General de la Presidencia, publicado el 22.03.2006.

Artículo 60 B.- La declaración de LEY 20088 patrimonio comprenderá también los Art. 1° N° 1 bienes del cónyuge de las personas a D.O. 05.01.2006 que se refiere el artículo anterior, NOTA siempre que estén casados bajo el régimen de sociedad conyugal. No obstante, si el cónyuge es mujer, no se considerarán los bienes que ésta administre de conformidad a los artículos 150, 166 y 167 del Código Civil.

NOTA:

El artículo 2° Transitorio de la LEY 20088, publicada el 05.01.2006, modificatoria de la presente norma, dispone que las modificaciones que introduce a ésta, entrarán en vigencia noventa días después de la publicación del Reglamento que establecerá los requisitos de las declaraciones de patrimonio, según lo dispone el artículo 1° Transitorio de la citada Ley. Dicho reglamento se encuentra contenido en el DTO 45, Secretaría General de la Presidencia, publicado el 22.03.2006.

Artículo 60 C.- La declaración de LEY 20088 patrimonio deberá contener la Art. 1° N° 1 individualización de los siguientes D.O. 05.01.2006 bienes: NOTA

- a) inmuebles del declarante, indicando las prohibiciones, hipotecas, embargos, litigios, usufructos, fideicomisos y demás gravámenes que les afecten, con mención de las respectivas inscripciones;
- b) vehículos motorizados, indicando su inscripción;
- c) valores del declarante a que se refiere el inciso primero del artículo 3° de la ley N° 18.045, sea que se transen en Chile o en el extranjero;
- d) derechos que le corresponden en comunidades o en sociedades constituidas en Chile o en el

extranjero.

La declaración contendrá también una enunciación del pasivo, si es superior a cien unidades tributarias mensuales.

NOTA:

El artículo 2° Transitorio de la LEY 20088, publicada el 05.01.2006, modificatoria de la presente norma, dispone que las modificaciones que introduce a ésta, entrarán en vigencia noventa días después de la publicación del Reglamento que establecerá los requisitos de las declaraciones de patrimonio, según lo dispone el artículo 1° Transitorio de la citada Ley. Dicho reglamento se encuentra contenido en el DTO 45, Secretaría General de la Presidencia, publicado el 22.03.2006.

Artículo 60 D.- La declaración de LEY 20088 patrimonio será pública y deberá Art. 1° N° 1 actualizarse cada cuatro años y cada D.O. 05.01.2006 vez que el declarante sea nombrado en NOTA un nuevo cargo.

Sin perjuicio de lo anterior, al concluir sus funciones el declarante también deberá actualizarla.

Esta declaración deberá ser presentada, dentro de los treinta días siguientes a la asunción en el cargo o la ocurrencia de algunos de los hechos que obligan a actualizarla, ante el Contralor General de la República o el Contralor Regional respectivo, quien la mantendrá para su consulta.

NOTA:

El artículo 2° Transitorio de la LEY 20088, publicada el 05.01.2006, modificatoria de la presente norma, dispone que las modificaciones que introduce a ésta, entrarán en vigencia noventa días después de la publicación del Reglamento que establecerá los requisitos de las declaraciones de patrimonio, según lo dispone el artículo 1° Transitorio de la citada Ley. Dicho reglamento se encuentra contenido en el DTO 45, Secretaría General de la Presidencia, publicado el 22.03.2006.

Párrafo 4° (Arts. 61-68)

De la responsabilidad y de las sanciones

Artículo 61.- Las reparticiones Ley 19.653 encargadas del control interno en los Art. 2° órganos u organismos de la D.O. 14.12.1999 Administración del Estado tendrán la obligación de velar por la observancia de las normas de este Título, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República. La infracción a las conductas exigibles prescritas en este Título

hará incurrir en responsabilidad y traerá consigo las sanciones que determine la ley. La responsabilidad administrativa se hará efectiva con sujeción a las normas estatutarias que rijan al órgano u organismo en que se produjo la infracción.

Corresponderá a la autoridad LEY 20000 superior de cada órgano u organismo Art. 68 N° 3 de la Administración del Estado D.O. 16.02.2005 prevenir el consumo indebido de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, de acuerdo con las normas contenidas en el reglamento. El reglamento a que se refiere el inciso anterior contendrá, además, un procedimiento de control de consumo aplicable a las personas a que se refiere el artículo 55 bis. Dicho procedimiento de control comprenderá a todos los integrantes de un grupo o sector de funcionarios que se determinará en forma aleatoria; se aplicará en forma reservada y resguardará la dignidad e intimidad de ellos, observando las prescripciones de la ley N° 19.628, sobre protección de los datos de carácter personal. Sólo será admisible como prueba de la dependencia una certificación médica, basada en los exámenes que correspondan.

Artículo 62.- Contravienen Ley 19.653 especialmente el principio de la Art. 2° probidad administrativa, las D.O. 14.12.1999 siguientes conductas:

1. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña;
2. Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero;
3. Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros;
4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales;
5. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza.

Exceptúanse de esta prohibición los donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación.

El millaje u otro beneficio

similar que otorguen las líneas aéreas por vuelos nacionales o internacionales a los que viajen como autoridades o funcionarios, y que sean financiados con recursos públicos, no podrán ser utilizados en actividades o viajes particulares;

6. Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.

Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta;

7. Omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley la disponga; LEY 20205

8. Contravenir los deberes de Art. 3° N° 1 eficiencia, eficacia y legalidad que D.O. 24.07.2007 rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración, y LEY 20205

9. Efectuar denuncias de Art. 3° N° 2 irregularidades o de faltas al principio D.O. 24.07.2007 de probidad de las que haya afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado.

Artículo 63.- La designación de Ley 19.653 una persona inhábil será nula. La Art. 2° invalidación no obligará a la D.O. 14.12.1999 restitución de las remuneraciones percibidas por el inhábil, siempre que la inadvertencia de la inhabilidad no le sea imputable.

La nulidad del nombramiento en ningún caso afectará la validez de los actos realizados entre su designación y la fecha en que quede firme la declaración de nulidad. Incurrirá en responsabilidad administrativa todo funcionario que hubiere intervenido en la tramitación de un nombramiento irregular y que por negligencia inexcusable omitiere advertir el vicio que lo invalidaba.

Artículo 64.- Las inhabilidades Ley 19.653 sobrevinientes deberán ser declaradas Art. 2° por el funcionario afectado a su D.O. 14.12.1999 superior jerárquico dentro de los diez días siguientes a la configuración de alguna de las causales señaladas en el Artículo 54. En el mismo acto deberá presentar la renuncia a su cargo o función, salvo que la inhabilidad

derivare de la designación posterior de un directivo superior, caso en el cual el subalterno en funciones deberá ser destinado a una dependencia en que no exista entre ellos una relación jerárquica.

En el caso de la inhabilidad a LEY 20000 que se refiere el artículo 55 bis, Art. 68 N° 4 a) junto con admitirla ante el superior D.O. 16.02.2005 jerárquico, el funcionario se someterá a un programa de tratamiento y rehabilitación en alguna de las instituciones que autorice el reglamento. Si concluye ese programa satisfactoriamente, deberá aprobar un control de consumo toxicológico y clínico que se le aplicará, con los mecanismos de resguardo a que alude el artículo 61, inciso cuarto.

El incumplimiento de cualquiera LEY 20000 de estas normas será sancionado con Art. 68 N° 4 b) la medida disciplinaria de destitución D.O. 16.02.2005 del infractor. Lo anterior es sin perjuicio de la aplicación de las reglas sobre salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo, si procedieren, tratándose de la situación a que alude el inciso segundo.

Artículo 65.- La no presentación Ley 19.653 oportuna de la declaración de intereses Art. 2° o de patrimonio será sancionada con LEY 20088 multa de diez a treinta unidades Art. 1° N° 2 a) tributarias mensuales, aplicables D.O. 05.01.2006 a la autoridad o funcionario NOTA infractor. Transcurridos treinta días desde que la declaración fuere exigible, se presumirá incumplimiento del infractor y será aplicable lo dispuesto en los incisos siguientes.

La multa será impuesta administrativamente, por resolución del jefe superior del servicio o de quien haga sus veces. Si el infractor fuere el jefe del servicio, la impondrá el superior jerárquico que corresponda, o en su defecto, el ministro a cargo de la Secretaría de Estado mediante el cual el servicio se encuentra sometido a la supervigilancia del Presidente de la República. La resolución que imponga la multa tendrá mérito ejecutivo y será impugnabile en la forma y plazo prescritos por el Artículo 68.

No obstante lo señalado en el inciso anterior, el infractor tendrá el plazo fatal de diez días, contado desde la notificación de la resolución de multa, para presentar la declaración omitida. Si así lo hiciere, la multa se rebajará a la mitad. Si el funcionario LEY 20088 se muestra contumaz en la omisión, esta Art. 1° N° 2 b) circunstancia será tenida en cuenta para D.O. 05.01.2006 los efectos de su calificación y se le NOTA

aplicarán las sanciones disciplinarias correspondientes.

El incumplimiento de la obligación de actualizar la declaración de intereses o de patrimonio se sancionará LEY 20088 con multa de cinco a quince unidades Art. 1° N° 2 c) tributarias mensuales y, en lo demás, D.O. 05.01.2006 se registrará por lo dispuesto en los incisos segundo y tercero de este Artículo.

El jefe de personal o quien, en razón de sus funciones, debió haber advertido oportunamente la omisión de una declaración o de su renovación y no lo hizo, incurrirá en responsabilidad administrativa.

NOTA:

El artículo 2° Transitorio de la LEY 20088, publicada el 05.01.2006, modificatoria de la presente norma, dispone que las modificaciones que introduce a ésta, entrarán en vigencia noventa días después de la publicación del Reglamento que establecerá los requisitos de las declaraciones de patrimonio, según lo dispone el artículo 1° Transitorio de la citada Ley. Dicho reglamento se encuentra contenido en el DTO 45, Secretaría General de la Presidencia, publicado el 22.03.2006.

Artículo 66.- La inclusión a LEY 20088 sabiendas de datos relevantes inexactos Art. 1° N° 3 y la omisión inexcusable de información D.O. 05.01.2006 relevante requerida por la ley en la declaración de intereses o en la de patrimonio serán tenidas en cuenta para los efectos de las calificaciones y se sancionarán disciplinariamente con multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales.

NOTA:

El artículo 2° Transitorio de la LEY 20088, publicada el 05.01.2006, modificatoria de la presente norma, dispone que las modificaciones que introduce a ésta, entrarán en vigencia noventa días después de la publicación del Reglamento que establecerá los requisitos de las declaraciones de patrimonio, según lo dispone el artículo 1° Transitorio de la citada Ley. Dicho reglamento se encuentra contenido en el DTO 45, Secretaría General de la Presidencia, publicado el 22.03.2006.

Artículo 67.- DEROGADO LEY 20088

Art. 1° N° 4
D.O. 05.01.2006

NOTA

NOTA:

El artículo 2° Transitorio de la LEY 20088, publicada el 05.01.2006, modificatoria de la presente norma, dispone que las modificaciones que

introduce a ésta, entrarán en vigencia noventa días después de la publicación del Reglamento que establecerá los requisitos de las declaraciones de patrimonio, según lo dispone el artículo 1° Transitorio de la citada Ley. Dicho reglamento se encuentra contenido en el DTO 45, Secretaría General de la Presidencia, publicado el 22.03.2006.

Artículo 68.- Las resoluciones Ley 19.653 que impongan las multas contempladas Art. 2° en el Artículo 65, serán reclamables D.O. 14.12.1999 ante la Corte de Apelaciones con jurisdicción en el lugar en que debió presentarse la declaración. La reclamación deberá ser fundada, estar acompañada de los documentos probatorios en que se base y ser presentada dentro de quinto día de notificada la resolución. La reclamación será interpuesta ante la autoridad que dictó la resolución, la que dentro de los dos días hábiles siguientes deberá enviar a la Corte de Apelaciones todos los antecedentes del caso. La Corte de Apelaciones resolverá en cuenta, sin esperar la comparecencia del reclamante, dentro de los seis días hábiles siguientes de recibidos por la secretaría del tribunal los antecedentes o aquellos otros que mande agregar de oficio. La resolución de la Corte de Apelaciones no será susceptible de recurso alguno.

TITULO FINAL

Artículo 69.- Derógase el Artículo Ley 19.653 5° del decreto ley N° 2.345, de 1978, Art. 1° N° 14 y el decreto ley N° 3.410, de 1980. D.O. 14.12.1999
Artículo final.- Esta ley regirá Ley 18.575 desde la fecha de su publicación en el Art. Final Diario Oficial, con excepción de sus D.O. 05.12.1986
Artículos 27, 32, 43 y 49, los que entrarán en vigencia en el plazo de dos años contado desde esa fecha, y de la derogación del Artículo 5° del decreto ley N° 2.345, de 1978, la que regirá en el plazo de seis meses, contado igualmente desde tal fecha.

Artículo 1° transitorio.- Delégase Ley 18.575 en el Presidente de la República, por Art. 1° transitorio el plazo de un año, la facultad de D.O. 05.12.1986 suprimir, modificar o establecer normas legales, con el solo objeto de adecuar el régimen jurídico de los órganos a que se refiere el Artículo 21, inciso primero, a los Artículos 27, 32, 43 y 49.

Artículo 2° transitorio.- DEROGADO LEY 19882
Art. SEPTUAGESIMO
D.O. 23.06.2003

NOTA

NOTA:

El artículo SEPTUAGESIMO de la LEY 19882, establece normas para los funcionarios que hayan

optado por continuar desempeñándose en un cargo adscrito y que presenten la renuncia voluntaria al mismo, quienes tendrán derecho a recibir una indemnización, en la forma y monto que indica dicha norma. En el caso de los cargos o empleos adscritos cuyos titulares no se hayan acogido a lo dispuesto anteriormente, se suprimirán por el solo ministerio de la ley a contar de 1° de julio de 2006 y percibirán la indemnización del artículo 148 de la ley 18834.

Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- Alvaro García Hurtado, Ministro Secretario General de la Presidencia.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Eduardo Dockendorff Vallejos, Subsecretario General de la Presidencia de la República.